

Santiago, nueve de agosto de dos mil veintidós.

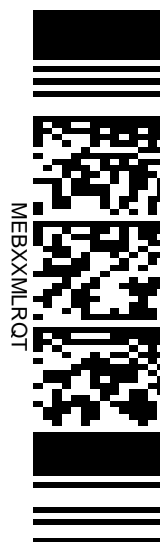
Vistos:

En los autos RIT N° O-6145-2020, RUC N° 20-4-0297323-5, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, caratulados “Urbina Vélez, Elizabeth con Banco Estado Centro de Servicios S.A.”, sustanciados bajo las normas del procedimiento de aplicación general, sobre despido indebido, cobro de indemnizaciones y prestaciones laborales, por sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, la magistrada doña Romina Alejandra Zuloaga Fernández, rechazó la demanda interpuesta, y en virtud de ello se declaró que el despido es justificado y procedente.

En contra de este fallo, el letrado que representa a la parte demandante dedujo recurso de nulidad, fundando su arbitrio en la causal de nulidad del artículo 478 letra d) del Código del Trabajo, esto es, cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre intermediación o cualquier otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial.

Así, solicita a esta Corte que conociendo del recurso, anule la sentencia, dictando la correspondiente sentencia de reemplazo, según lo dispuesto en los artículos 477 y siguientes del Código del Trabajo, ello sin perjuicio de la facultad concedida en virtud de lo establecido en el inciso final del artículo 479 del Código del Trabajo, declarando injustificado, indebido e improcedente el término de su contrato de trabajo, solicitando desde ya se acoja, dando lugar a ella en todas sus partes, con costas de la instancia y del recurso.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los apoderados de ambas partes por sistema de video conferencia.



Considerando

Primero: La parte demandante cuestiona el fallo pronunciado en estos antecedentes a través del recurso de nulidad, para lo cual lo funda en la causal del artículo 478 letra d) del Código del Trabajo, esto es que en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o cualquier otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial expresamente; en este caso por transgresión al principio de la inmediación.

Segundo: Al respecto la recurrente, previa exposición de los antecedentes del proceso, señala que, en la sustanciación de la audiencia de este juicio se ha transgredido el principio de inmediación, toda vez que el contacto directo de la jueza con cada uno de los medios de prueba no se encontró resguardado y ha afectado un análisis conjunto de los medios de prueba, ya que la sentenciadora dictó sentencia a más de tres y medio meses de concluida la última audiencia de juicio. Por ello, se ha vulnerado el principio de inmediación y, en consecuencia, los principios de concentración y continuidad de las audiencias, lo que afectó de manera sustancial en lo dispositivo del fallo, incurriendo la sentenciadora en inexactitudes, inconsistencias y omisiones; en este orden de ideas, no analizo toda la prueba rendida ni dio por establecidos los hechos necesarios conforme la litis trabada, todo lo cual fue consecuencia directa del tiempo transcurrido entre las audiencias y la dictación del fallo.

Refiere que la audiencia de juicio se desarrolló el día 19 de agosto del año 2021 y que, al término de ésta, la jueza fijó fecha para la notificación de la sentencia definitiva para el día 06 de septiembre de 2021, a las 16:00 horas, empero, ello sólo se verificó el 29 de diciembre de 2021. Por lo antes señalado, esta parte considera que la jueza no respetó el plazo establecido



en el artículo 457 del Código del Trabajo para los efectos de dictar sentencia.

Tercero: A continuación, la demandante y ahora recurrente, precisa el concepto de inmediación, afirmando que mientras más tiempo medie entre la producción de la prueba y la dictación de la sentencia, menor valor pasa a tener la percepción de las probanzas retenidas en la memoria del juzgador, aumentando proporcionalmente el valor de las actas o apuntes del propio juez y la revisión privada de los antecedentes en su despacho, sin la intervención de las partes. Ocurrido lo anterior, estima que existe solo una apariencia de inmediación, que es lo que sucede en el caso de autos, pues en atención al largo tiempo transcurrido desde que se comenzó a recibir la prueba ofrecida por las partes hasta que se dictó sentencia, la valoración efectuada de todo acervo probatorio necesariamente se debió haber realizado mediante los registros de audios respectivos y no por la apreciación inmediata y directa que se requiere para estos efectos. Por lo antes indicado, esta parte asevera que el vicio influyó en lo dispositivo del fallo, por cuanto conforme consta del mérito de los antecedentes, la última audiencia de juicio fue celebrada con fecha 19 de agosto del año 2021, y la sentencia definitiva fue recién dictada con fecha 29 de diciembre de 2021, esto es, tres meses y dieciocho días. Reitera que al haber sido dictada la sentencia recurrida pasado el plazo máximo, se ha cometido infracción a los principios de la inmediación y, además, al artículo 460 del Código del Trabajo, en tanto el juez que dirigió las audiencias de juicio, entre ellas la última de fecha 19 de agosto del año 2021, no pudo dictar sentencia dentro del plazo legal, y ello necesariamente debió devenir en la forma particular de nulidad procesal prevista en dicha norma, debiendo celebrarse nuevo juicio.



Cuarto: También indica que la omisión de toda referencia a la prueba testimonial, es palmaria del vicio alegado por el tiempo transcurrido, en que la sentenciadora ha preferido la revisión de prueba documental, omitiendo toda referencia a la prueba testimonial, bajo la importancia que revestía en este proceso. Así, expone que en la audiencia de juicio declararon los testigos a) Loreto Patricia Bustos Freire; b) Cristina Alejandra San Martin Cofre; c) Carolina Ingrith García- Reyes Rehren, por la demandada y Mario Hugo Trivinõ Minõ, por su parte.

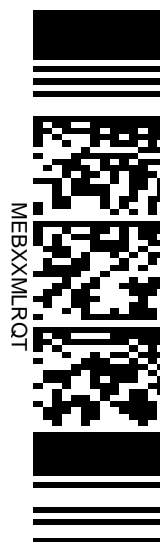
Respecto de doña Loreto Patricia Bustos Freire, indica que consta en registro de audio que se reconoce por la testigo que las cámaras de registro no contienen audio; que se exhiben fotografías, donde se reconoce que la actora no se encuentra presente en todos los momentos frente a la cajera que cometió el error. En cuanto a doña Cristina Alejandra San Martin Cofre, expresa que consta en registro de audio se reconoce por la testigo que las cámaras de registro no tienen audio, no vio un movimiento de manos aprobando la transacción, no vio la boca de la trabajadora autorizando la transacción. En lo referente a doña Carolina Ingrith García-Reyes Rehren, señala que en la investigación no entrevistaron a la asistente externa, quien fue quién cometió el acto. Respecto de Mario Trivinõ Minõ, presidente del sindicato de la organización a que se encontraba afiliada la demandada, señaló: a) Que la actora fue ascendida a jefa de sucursal; b) Que el 90% de las actividades de un cajero no requieren autorización; c) Giros de menos de \$ 1.000.000.- no requieren autorización del cajero; d) Que el hecho por el cual se le imputo'el problema (un giro de \$ 19.000.-) no requiere la autorización del cajero; e) Que se llevan 300 operaciones por día y es físicamente imposible autorizar todas las operaciones; f) La actora no tiene forma de validar si un cajero efectúa una operación, si no le pide autorización. Reitera que nada de ello consta en la sentencia, pero sí en



registro de audio; por último, expone que de esta forma la sentenciadora prefiere y se basa en una investigación efectuada por la Subgerencia de Riesgo Operacional y Cumplimiento, la cual emite un informe de fecha 04 de septiembre de 2020, y omite toda referencia a la declaración testimonial, que llevo' a cabo en este proceso, restando valor a la prueba viva, que precisamente relativiza el procedimiento de investigación.

Quinto: Para resolver el problema propuesto por la recurrente, resulta atingente al caso, recordar que la causal de nulidad que se esgrime en el recurso, letra d) del artículo 478 del Estatuto laboral, se ha concebido como una sanción para aquellos casos o situaciones en que “...hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación...”. Por lo antes indicado, debe tenerse presente que el artículo 427 del Código del Trabajo establece que “... Las audiencias se desarrollarán en su totalidad ante el juez de la causa, el que las presidirá y no podrá delegar su ministerio. El incumplimiento de éste deber será sancionado con la nulidad insanable de las actuaciones y de la audiencia, la que deberá declarar el juez de oficio o a petición de parte...”; este incumplimiento al denominado principio de la inmediación, se ve reforzado en el inciso segundo del artículo 429, al disponer que: “En el caso previsto en el artículo 427, el tribunal no podrá excusarse de decretar la nulidad.”.

Sexto: Por lo antes dicho, como se puede inferir, las disposiciones legales señaladas conducen a que, por regla general, la inmediación se traduce en un imperativo de validez de las actuaciones del proceso, la que adquiere su mayor expresión en la exigencia de que sólo el juez que haya asistido a la práctica de las pruebas y haya entrado en relación directa con las partes puede pronunciar la sentencia, como lo manda el artículo 460 del mismo texto legal. En suma, la inmediación se traduce en la condición



indispensable de que las audiencias tengan que verificarse siempre y en todo “por y ante el juez de la causa”, de manera presencial e indelegable.

Séptimo: En el presente caso, si bien la motivación del abogado que representa a la recurrente, señala que su petición de nulidad es por vulneración al principio de la inmediación, en razón de que la jueza de mérito, entre la conclusión de la audiencia de juicio y la dictación del fallo, dejó pasar más de tres meses, pero lo cierto es que lo que pretende es que esta Corte anule la sentencia atacada y proceda a dictar una nueva, que vuelva analizar la prueba aportada en la audiencia de juicio, en especial la testimonial, con la finalidad de obtener un resultado favorable a los intereses de su parte, como queda de manifiesto de la simple lectura del petitorio del escrito que contiene su recurso, en que señala: “...conociendo del recurso, anule la sentencia, dictando la correspondiente sentencia de reemplazo de la que se anule, según lo dispuesto en los artículos 477 y siguientes del Código del Trabajo, ello sin perjuicio de la facultad concedida en virtud de lo establecido en el inciso final del artículo 479 del Código del Trabajo, declare injustificado, indebido e improcedente el término de su contrato de trabajo, solicitando desde ya se acoja, dando lugar a ella en todas sus partes, con costas de la instancia y del recurso.”.

Octavo: En consecuencia, como se puede advertir, las razones que se aducen en el recurso como constitutivas de esta causal de nulidad, no tienen correspondencia con ella, toda vez que tales argumentos atañen a una supuesta falta de valoración de las pruebas producidas, en su caso a la testifical, vicio que –si fuera efectivo-, podría llegar a identificarse con un motivo de invalidación diferente.

Noveno: Por lo antes reflexionado, el recurso de nulidad deducido por la demandante por la causal invocada deberá ser desestimado y, por ende, la sentencia pronunciada en estos antecedentes no es nula.



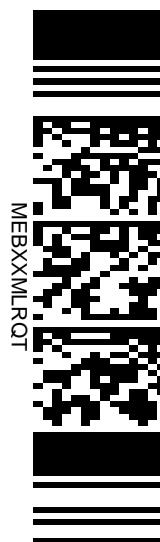
Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo, **se rechaza**, el recurso de nulidad deducido por la parte demandante, en contra de la sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Fiscal Judicial señor Daniel Calvo Flores.

No firma el ministro señor Fernando Carreño, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por ausencia.

Nº Laboral-Cobranza 202-2022.



Pronunciado por la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V. y Fiscal Judicial Daniel Calvo F. Santiago, nueve de agosto de dos mil veintidós.

En Santiago, a nueve de agosto de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>